No. 44/2021

Síntesis: Un grupo de personas manifestó que al encontrarse participando de forma pacífica en una marcha por los derechos de las mujeres, en la que expresaban rechazo al abuso policial, fueron detenidas por parte de agentes pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, quienes además ejercieron el uso de la fuerza sobre ellas, sin ningún motivo justificado. Asimismo, las personas detenidas arguyeron que estando detenidas, no se les permitió el acceso a una defensa o persona que las asistiera, ni se les permitió realizar manifestación alguna en su defensa.

Con base en la indagatoria realizada, este organismo determinó que existen evidencias suficientes para considerar violados los derechos fundamentales de 15 personas, específicamente por violaciones a los derechos a la libre manifestación de las ideas, difusión de opiniones, de reunión, legalidad, seguridad jurídica, integridad personal y defensa, en los hechos atribuidos al personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Juárez.

“2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México.”

“2021, Año de las Culturas del Norte.”

Oficio No. CEDH: 1s.1.186/2021

Expediente No. CEDH:10s.1.11.214/2020

RECOMENDACIÓN No. CEDH:5s.1.044/2021

Chihuahua, Chih., a 24 de diciembre de 2021

**LIC. CRUZ PÉREZ CUÉLLAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUÁREZ
PRESENTE.-**

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en relación a las quejas presentadas por “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “N”, “Ñ” y “O”¹, con motivo de actos que consideraron violatorios a sus derechos humanos, quejas acumuladas en el número de expediente **CEDH:10s.1.11.214/2020**, de conformidad con lo previsto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, párrafo tercero, inciso A, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los numerales 1, 3 y 6 fracción II, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como 6 y 12 del Reglamento Interno de esta Comisión, procede a resolver según el estudio de los siguientes:

¹ Por razones de confidencialidad y protección de datos personales, este organismo considera conveniente guardar la reserva de los nombres de algunas de las personas que intervinieron en los hechos, así como otros datos que puedan llevar a su identificación, los cuales se hacen del conocimiento de la autoridad mediante un documento anexo. Lo anterior con fundamento en los artículos 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 3, fracción XXI, 68, fracción VI, 116, párrafos primero y segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 7, 16, 17, 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3, 16 y 171 fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, y demás aplicables, y de conformidad al Acuerdo de Clasificación de Información que obra dentro del expediente de queja en resolución.

I.- ANTECEDENTES:

1. Mediante acta circunstanciada de fecha 05 de septiembre de 2020, elaborada por personal de este organismo, se hizo constar que la quejosa "A" expuso lo siguiente:

"...Estábamos manifestándonos pacíficamente, íbamos por la avenida Juárez como a las 6:00 de la tarde y escucho que unos agentes atrás de nosotras dan la orden para que detengan a una compañera y fui a resguardarla y luego vi que a mi mamá la estaban deteniendo y que la estaban maltratando y fui a ayudarla y la tomé del brazo y en eso una agente que no se identificó me comenzó a ahogar y le grité que no podía respirar pero me seguía apretando y en eso me aventó contra la patrulla y me dice "vas a valer verga" me siguió golpeando en la espalda y en la cintura, me aventaron contra la patrulla y me pusieron las esposas muy apretadas de forma que me lastimaron bastante ...". (Sic).

2. Asimismo, en fecha 05 de septiembre de 2020, personal de esta Comisión elaboró un acta circunstanciada en la que asentó que "B" expuso lo siguiente:

"...Estábamos en la Avenida Juárez íbamos marchando yo llevaba una manta que traía consignas feministas y empecé a escuchar gritos y al voltear para atrás vi muchos policías deteniendo compañeras y tumbándolas al piso, las quisimos auxiliar y un policía me agarró del cuello y me estaba ahorcando y sacaron unas esposas y me las apretaron muy fuerte al grado que una me dejó marcas y me esposaron a otra persona, me tomaron del cabello y me subieron a la patrulla encima de otras compañeras...". (Sic).

3. El mismo 05 de septiembre de 2020, se hizo constar en un acta circunstanciada elaborada por personal de este organismo, que "C" mencionó lo siguiente:

"... Participamos en una manifestación pacífica e íbamos por la avenida Juárez y había muchos policías acosándonos y unas compañeras rayaron la patrulla y en eso empezaron a agarrar a todas, yo estaba grabando con

mi celular y una comandante de nombre "X" hizo señas y hablaba en claves y me quitaron mi celular, el cual no me regresaron, que es de marca Samsung 8. Entonces de varios policías hombres me sometieron sólo por estar grabando, utilizaron la fuerza excesiva...". (Sic).

4. En un acta circunstanciada elaborada el día 05 de septiembre de 2020, personal de este organismo hizo constar la entrevista con la quejosa "D" misma que manifestó:

"...Yo iba sobre la avenida Juárez en el contingente feminista, íbamos marchando y veo que como a las 06:00 detuvieron a una compañera de nombre "K" y al intentar ayudarla un agente de la Policía Municipal me jaló de la mochila y me avienta al piso y me golpeó la cabeza y otro oficial me ahorcó, me levantó del cuello y me dice "te va a cargar la verga porque tú eres la que rayó la patrulla" y me apretaron mucho las esposas. Vi como estaban deteniendo a todas las que lograban agarrar sin ningún motivo y las jalaban de los cabellos y las insultaban...". (Sic).

5. En diversa acta circunstanciada realizada por personal de esta Comisión el 05 de septiembre de 2020, se asentó que la quejosa "E" declaró lo siguiente:

"... Íbamos en caravana rumbo a la cruz de clavos, íbamos siendo acosadas por policías en el trayecto de la avenida Juárez, y en eso nos empiezan a detener con empujones, jalándonos el cabello, tirándonos al piso acusándonos de rayar una patrulla y nos pusieron las esposas y una oficial mujer me pegó en la cabeza. En todo momento usaron la fuerza excesiva, me llevaron esposada y al momento de subirme a la patrulla me empujaron de la cabeza y me abrí el labio, siendo todo lo que deseo manifestar por el momento...". (Sic).

6. En el acta circunstanciada elaborada el 05 de septiembre de 2020, por el entonces visitador general de este organismo, licenciado Santiago González Reyes, se hizo constar que "F" enunció:

"...Siendo 18:30 horas aproximadamente, caminábamos por avenida Juárez, iba a un contingente de treinta a cuarenta personas, al caminar una

compañera se queda cuidando en la parte trasera del contingente, por lo que veía cerca de veinte o veinticinco elementos, nos percatamos que empiezan a correr tras la compañera y la agarran entre todos los policías, y era una sola persona por lo que nos acercamos para gritarles a los elementos que la soltaran, en ningún momento agredimos a los policías, nos decían o incitaban a que los golpeáramos, posteriormente los policías corren tras de nosotras, yo logré alejarme pero me siguen cuatro elementos y me detienen por la fuerza y me arrastraron de la playera, me duelen los brazos, las piernas, porque me tiraron y me pusieron los ganchos, me quedaron marcas del aseguramiento, ya me subieron y me aventaron para arriba de la unidad y una elemento dijo que eran órdenes del doble cero...". (Sic).

7. El mismo día 05 de septiembre de 2020, en un acta circunstanciada realizada por el mismo licenciado Santiago González Reyes, entonces visitador general de este organismo, se dio fe de que "G" manifestó lo siguiente:

"... Estábamos participando en una marcha pacífica que corría desde la 16 de septiembre y teníamos planeado ir hasta la cruz de clavos, escuchamos los gritos de nuestras compañeras y vimos como 10 policías estaban deteniendo a una compañera y la estaban golpeando, no supe quién era porque traía puesto un cubre bocas y otra compañera quiso intervenir y la agarraron por los brazos y se los pusieron atrás y otro policía la estaba ahorcando, sé que esa compañera se llama "E". Cuando nos sometieron nos pusieron una patrulla y estando la patrulla un policía me golpeó en una pierna cuando me subieron...". (Sic).

8. En diversa acta circunstanciada de fecha 05 de septiembre de 2020, se hizo constar que "H" expresó lo siguiente:

"...Participamos en una manifestación política en contra de la represión policial, pero era una manifestación pacífica y en un momento como a eso de las 06:00 de la tarde nos avisan que están deteniendo y sometiendo a las compañeras y yo comienzo a documentar, cuando una mujer policía me

toma de los brazos y me sube a una patrulla queriendo quitarme la capucha que fungía como cubrebocas y me quita los lentes y el celular y me comienza a golpear con el puño en las costillas y la espalda...”. (Sic).

9. Con fecha 09 de octubre de 2020, se recibió en este organismo, un escrito de queja signado por “I”, “J” y “K”, mediante el cual refirieron lo siguiente:

Manifiesta “I”: “...Que el día 05 de septiembre acudí al centro de ciudad Juárez, específicamente frente al MUREF². Asistí a la concentración pacífica de mujeres que se realizaba en contra de la represión y el abuso policial, aproximadamente a las 05:00, solamente con mi celular, con el objetivo de documentar. Desde que llegué al punto de encuentro ya percibía un fuerte operativo policiaco con equipo antimotines en las calles aledañas. Acciones que me parecieron excesivas para un grupo pequeño de mujeres entre las que había menores de edad. Me dediqué únicamente a documentar por seguridad del contingente. Nos movilizamos hacia la cruz de clavos sobre la avenida Juárez, el contingente de más de 50 policías nos siguió y a unos cuantos metros de las letras de Juárez comenzaron a detener a mis compañeras, con brutalidad, golpes y sin decirles un motivo o a dónde las llevarían. Temiendo por la vida e integridad de mis compañeras, intente documentar todo con mi teléfono celular; quién se llevaba a quién y qué unidad. Al tratar de documentar la detención y los atropellos a una de una de mis compañeras, quien específicamente estaba siendo asfixiada por otro policía encapuchado, no logré ni enfocar la imagen cuando ya tenía 2 policías hombres que medían casi el doble y triplicaban mi peso, someténdome con total violencia y brutalidad que me tiraron al piso, estando en el piso un policía encapuchado me arrancó la capucha y mi cubre bocas rasguñándome y arrancándome parte del cuero cabelludo. Teniéndome en el piso me decía que “sin capucha ya no era valiente”, irónicamente él también estaba encapuchado. Todo quedó documentado en una transmisión en vivo que yo estaba realizando. Durante el forcejeo

² Museo de la Revolución en la Frontera.

me quitaron mi celular y cortaron las transmisiones en vivo. Me esposaron con corbatas de plástico, cortando totalmente la circulación de mi muñeca izquierda. Para levantarme del piso me jalaron del cabello hasta ponerme de pie. Jamás me dijeron el motivo de la detención, jamás me leyeron mis derechos. Me llevaron junto con otras chicas a estación universidad donde nos mantuvieron incomunicadas por más de 3 horas. Hostigándonos, tomándonos fotografías con sus celulares particulares, amenazándonos e intimidándonos. No permitieron la entrada a nuestros abogados.

Al llegar derechos humanos no hicieron más que negociar una fianza de más de \$1000.00, aun cuando ya había un amparo por cada una de las detenidas. Las consecuencias: múltiples hematomas en brazos y piernas e inflamación de la muñeca izquierda. Tuve que recibir atención médica particular, ya que el médico minimizó todos los síntomas y golpes. Además de la atención urgente de mi psicóloga para recibir contención emocional...". (Sic).

Manifiesta "J": "... Mi nombre es "J", a continuación, relataré lo que viví el día 05 de septiembre de 2020: Al punto de las 17:00 horas se congrega a una marcha pacífica para manifestar el rechazo al abuso policial sufrido días atrás hacia nuestras compañeras de León, Guanajuato. Al momento de iniciar la marcha, los policías fueron llegando poco a poco hasta doblarnos en número, en su mayoría eran oficiales masculinos. Al encontrarnos marchando por la avenida Juárez en dirección a la cruz de clavos, me percaté de que entre cuatro oficiales tratan de esposar y llevarse arbitrariamente a una de las compañeras que marchaban en la parte de atrás. El contingente detuvo su marcha, algunas compañeras se acercaron a los oficiales para intentar dialogar con ellos, a lo que los oficiales respondieron con violencia y comenzaron a detenerlas arbitrariamente y con lujo de violencia a ellas también. Al momento me percaté de que cinco oficiales comienzan a perseguirme, aun cuando yo solo estaba ahí parada. Me jalaron mi cubre bocas, lentes y gorra al tratar de atraparme, me metí a

un local de artesanías, y al momento de salir me topé de frente con aproximadamente diez oficiales con claras intenciones de arrestarme a pesar de que yo en ningún momento incurrí en algún delito. A pesar de no poner resistencia al arresto sufrí jaloneos, golpes, humillaciones por mi orientación sexual y amenazas, cito las amenazas de los oficiales: “Ya valiste verga, culera”, “Te vamos a dar tu paseada”, “Ya chingaste a tu madre”, “Aquí no van a estar tus amiguitas para ayudarte”. También les pedí que se identificaran y que me dijeran cual era el motivo de la detención a lo que se negaron rotundamente los oficiales, además de que en ningún momento hicieron de mi conocimiento mis derechos y el lugar al cual me iban a llevar. Cuando me iban a subir a la patrulla una oficial, la cual nunca se identificó a pesar de pedírselo reiteradamente, aprovechando que yo estaba maniatada me quitó mi teléfono celular. Subí a la patrulla y unos minutos después, emprendimos rumbo, el cual era desconocido para mí. Llegamos a la estación de policía “universidad”, lugar en el cuál solo empeoró el atropello a nuestros derechos. Al bajarnos de las patrullas nos mantuvieron por más de una hora aglomeradas en el estacionamiento, comenzaron a fotografiarnos con los teléfonos celulares personales y a pedirnos nuestros datos personales. Nuestras fotografías y datos personales fueron enviadas a un grupo de WhatsApp, al cuestionarlos por esto ellos dijeron que era parte de su procedimiento, lo cual es totalmente falso. Después de eso ingresamos a la estación de policía, fuimos revisadas visualmente y desde un metro y medio de distancia por el médico legista de la estación, registramos nuestras pertenencias y fuimos ingresadas a las celdas. En ningún momento tuvimos una comunicación más allá de dos minutos de llamada que se nos concedió, pero nunca tuvimos acceso con un abogado y desconocíamos nuestra situación jurídica. Después de varias horas de incertidumbre y de amenazas por parte de los oficiales fuimos llamadas a una audiencia con una funcionaria de barandilla la cual se presentó como la jueza en turno. Nos leyó nuestros derechos, lo cual no significó que se estuvieran cumpliendo. Nos leyó la

relatoría de los hechos que fue contada por los oficiales, la cuál era totalmente falsa ya que no coincidían los horarios ni el número y género de los elementos que participaron en la detención, por ejemplo, en esa relatoría solo se declaraba que nos detuvieron tres oficiales femeninas, cuando en realidad al momento de la detención los oficiales nos doblaban en número y el 90% se trataba de masculinos. Al declarar ante la supuesta jueza, esta sólo usó nuestra declaración en nuestra contra, malversándola y dejando de lado nuestras declaraciones del abuso que sufrimos por parte de los oficiales. Hasta ese momento no tuvimos acceso a un abogado y tampoco comunicación con nuestros familiares. Nos impuso una multa de \$1128.00 pesos, a pesar de que se había tramitado un amparo, del cual nunca nos enteramos por la falta de comunicación. Después de pagar la multa pudimos retirarnos de la estación. Debido al mal manejo que los oficiales de policía pueden darle a mi información personal, temo por mi seguridad y hago responsable a la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, a su titular Raúl Ávila Ibarra y al presidente municipal de Ciudad Juárez Héctor Armando Cabada Alvidrez por cualquier daño físico y/o patrimonial hacia mi persona y hacia mi familia...". (Sic).

Manifiesta "K": "...El día 05 de septiembre acudí a una manifestación pacífica para protestar en contra del abuso policiaco y a los pocos minutos de llegar ya había presencia policiaca y desde ese momento empezaron a tomarnos fotos con sus teléfonos particulares, al desplazarnos a la avenida Juárez ya una gran cantidad de policías iban atrás de nosotros cuando de repente vi que llevaban a una gran cantidad de compañeras ya esposadas sin motivo alguno. Al acércanos y cuestionarlos por qué se la estaban llevando y al pedirles que se identificaran no lo hicieron, fue en ese momento a detenernos arbitrariamente a base de golpes insultos y violación total de nuestros derechos. Vi como asfixiaban a una de mis hijas un elemento que le doblaba el peso, vi como golpeaban a otra de mis hijas al igual que a las demás compañeras. Al arrancarme mi capucha y cubre bocas me causaron daño en la cervical, dato que el médico legista no

documentó, de hecho, el médico legista no documentó las lesiones. Nos quitaron los celulares, nos subieron con violencia a las unidades y a mi hija la golpeó un agente en la cara en frente de mí y al llegar a los patios de la estación un agente me amenazó diciéndome "ya estás sola, ahora si te vamos a chingar". No tomaron ninguna medida de protección sanitaria para evitar el contagio de Covid y nos estuvieron tomando fotos y datos con sus teléfonos particulares y nos dijeron que era para un grupo interno de WhatsApp, por lo cual temo por mi seguridad y el de mis compañeras. Hasta el momento que llegó Derechos Humanos fue cuando empezaron a tomar medidas de precaución y sanitarias. Yo les pregunté a varias agentes sobre mi comunicación de mi abogado y en ningún momento se me comunicó que había abogados afuera de la estación. Ya estando en las celdas continuaron los abusos y una de las agentes me amenazó ante la jueza cívica cuando yo la cuestioné que lo que no era verdad, lo que se había puesto en el parte informativo y cada vez que le cuestionaba algo me callaba...". (Sic).

- 10.** En acta circunstanciada de fecha 05 de septiembre de 2020, elaborada por el licenciado Santiago González Reyes, entonces visitador general de este organismo, se asentó la queja de "L", quien señaló lo siguiente:

"Acudimos mi hermana y yo a una marcha pacífica, e íbamos en el contingente y comenzaron a detener a todas las participantes del contingente sin ningún motivo, y de pronto nos agarraron del cuello y nos tiraron al piso y nos patearon, y ahí nos pusieron las esposas, y ya con las esposas puestas nos llevaban jalando del cabello. A todas las que veía que detenían, las estaban maltratando...". (Sic).

- 11.** En acta circunstanciada de fecha 05 de septiembre de 2020, elaborada por personal de esta Comisión, se asentó la queja de "N", quien señaló lo siguiente:

"Yo estaba participando en la marcha feminista y oí gritos y vi que empezaron a detener a muchas compañeras y yo me quise meter aun local que está en la avenida Juárez, porque vi que estaban deteniendo a todas

sin ningún motivo. Y al querer entrar en el local, un policía me impidió abrir la puerta del local y me esposó, y me llevaban jalándome del cabello y me subieron a una patrulla...”. (Sic).

- 12.** En acta circunstanciada de fecha 05 de septiembre de 2020, elaborada por personal de este organismo, se asentó la queja de “Ñ”, quien señaló lo siguiente:

“Estábamos paradas en la Juárez, como a las seis de la tarde del día de hoy y nos empezaron a corretear los policías, y les dije que me dejaran y después pregunté por qué motivo me detenían, si yo solo hacía uso del derecho de libertad de expresión, y una mujer oficial me jaló el cabello, me torció el brazo y me iban empujando a una patrulla, nunca me dijeron el motivo de mi detención...”. (Sic).

- 13.** En acta circunstanciada de fecha 05 de septiembre de 2020, elaborada por el licenciado Santiago González Reyes, entonces visitador general de este organismo, se asentó la queja de “O”, quien señaló lo siguiente:

“Participamos en una manifestación feminista, íbamos por la avenida Juárez rumbo a la cruz de clavos y de repente policías municipales comenzaron a detener compañeras de forma muy violenta, eran como las 06:00 de la tarde, nos resguardamos en un local que está en la avenida Juárez y los policías hombres entraron al local y nos esposaron. Un policía hizo gestos como burlándose, nos arrestaron y nos trajeron, pero nosotras no hicimos nada indebido, nos arrestaron injustamente...”. (Sic).

- 14.** En fecha 28 de septiembre de 2020, mediante el oficio número SSPM/DAJ/NYSV/11743/2020, el licenciado Miguel Mendoza Escamilla, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, rindió el informe solicitado por este organismo, por lo que en relación a la queja manifestó lo siguiente:

“...Primero.- Se realizó una búsqueda entre los registros con los que cuenta esta institución sobre intervenciones, detenciones y/o revisiones policiales que se hayan suscitado respecto a lo manifestado en el escrito

de queja, tenemos que: en fecha 05 de septiembre de 2020, agentes de esta institución, al realizar su recorrido de vigilancia, por el cruce de las calles Juárez y Abraham González de la zona Centro, se percataron de un grupo de feministas, que se encontraban gritando palabras altisonantes, tales como pinchis violadores culeros, gobierno de mierda, váyanse a la verga, chinguen a su madre y le tienen miedo a los sicarios; en ese momento pasan por la calle personas del sexo masculino a los que agredieron verbalmente con las palabras antes mencionadas, sacaban sus pinturas en spray simulando que los iban a grafitear, por lo que las personas salían corriendo y ellas los perseguían. En razón de lo anterior, se procedió a darles alcance metros adelante, y una vez que se pidió el apoyo para el traslado, arribaron las unidades "Y", "Z", "AA", "BB", "CC", "DD". Se les informó que su conducta constituía una falta administrativa contemplada en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en el artículo 6 fracción I, por lo que previa lectura de sus derechos se procedió a remitirlas al juez en turno. Se aseguraron 6 latas de pintura en aerosol de varios colores, un bate de color rojo de aluminio y dos mantas con la leyenda: "mujeres en rebelión uniendo voces por la libertad, militarización en feminicidio y desaparición, mujeres vs guerra, la policía no me cuida me cuidan las mujeres organizadas, con el poder de las mujeres el miedo cambio de bando, pienso luego estorbo".

Segundo.- Las intervenciones realizadas por los agentes pertenecientes a esta institución se realizan en cumplimiento a lo establecido en los artículos 41 y 43 fracciones VI y IX del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del municipio de Juárez, relativo a las atribuciones reservadas a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, las cuales son la prevención de delitos y/o faltas administrativas; la intervención se realizó sin transgredir derechos, tratando de hacer prevalecer la seguridad y tranquilidad social.

Tercero.- Los agentes al realizar la intervención, en ningún momento violentaron derechos humanos, ya que se originó por una falta

administrativa en flagrancia; justificando de esta manera la intervención realizada. Dicha intervención derivó en la detención de las hoy quejas por una falta administrativa contemplada en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en los supuestos del artículo 6 fracción I.

Cuarto.- De acuerdo a los manuales de actuaciones policiales y a protocolos, al momento de que se realiza una detención, en caso de que sean policías hombres y aseguren a una mujer, deberán solicitar vía radio frecuencia que se acerque una policía mujer, para comenzar con el cacheo correspondiente y su detención. Cuando se comete un delito o falta administrativa en flagrancia, se puede realizar la detención por parte de un policía hombre a una mujer y se debe solicitar el apoyo de una mujer para la revisión, situación que aconteció en el caso que nos ocupa.

Quinto.- Al momento de su ingreso a las instalaciones de esta institución, se realizó un examen físico a las detenidas, una vez realizado lo anterior, se certificó que no existió el empleo de fuerza durante su detención, menos aún que se empleara el uso excesivo de la fuerza pública, como lo hace saber en su escrito de queja, dicho certificado se contrapone a lo señalado por las quejas. Es preciso señalar que al momento de que se elabora un certificado médico, por parte de área correspondiente, se toman las medidas de higiene correspondiente, no solo ante la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país y en mundo en estos momentos del COVID-19, sino que es parte del procedimiento habitual que se tomen las medidas de higiene pertinentes tanto para el personal médico como para la persona que se revisa y con mayor razón ante la situación actual.

Por todo lo anterior es que esta Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala que en ningún momento incurrió en alguna violación a los derechos humanos, por el contrario, se realizaron las acciones pertinentes y se actuó bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, se considera que no se

actualiza violación alguna, ya que los policías de esta Secretaría en ningún momento violentaron los derechos de “A”, “L”, “H”, “M”, “N”, “Ñ”, “G”, “O”, “P”, “F”, “Q”, “E”, “D”, “R”, “C”, “B” y “S”.

Se anexa al presente el oficio SSPM/PJ/1802/2020 suscrito por el Pol. I. Ochoa González Ricardo Alejandro, jefe de Plataforma Juárez, con cuarenta anexos; y oficio número SSPM/636/DM/2020 suscrito por el doctor Luis Carlos Gutiérrez Pérez, jefe del Departamento Médico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con diecisiete anexos.

Por lo anteriormente expuesto a usted visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, atentamente solicito:

Único.- Tenerme por presente dando cabal cumplimiento al informe solicitado por esa H. Comisión.

En atención a lo narrado en líneas precedentes solicito que se valore la información proporcionada y en los términos del artículo 32 y 43 de la Ley de la materia, se declare improcedente la presente queja, por no actualizarse ni acreditarse las supuestas violaciones en perjuicio de “A”, “L”, “H”, “M”, “N”, “Ñ”, “G”, “O”, “P”, “F”, “Q”, “E”, “D”, “R”, “C”, “B” y “S”. (Sic).

II.- EVIDENCIAS:

- 15.**Acta circunstanciada de fecha 05 de septiembre de 2020, elaborada por el licenciado Santiago González Reyes, entonces visitador general de esa Comisión, transcrita en el punto número 1 de la presente resolución. (Fojas 1 y 2).
- 16.**Acta circunstanciada de fecha 06 de septiembre de 2020 elaborada por el mismo licenciado Santiago González Reyes (foja 3), mediante la cual hizo constar que mientras estaba constituido en las instalaciones de la estación Universidad de la policía municipal de ciudad Juárez, “A” le presentó un escrito, el cual ordenó agregar a su expediente, siendo éste del contenido siguiente:

- 16.1.** Escrito en hoja de cuaderno firmado por “A”, recibido en fecha 06 de septiembre de 2020, en el que señaló que el médico legista que la examinó y la enfermera a cargo, no portaban cubrebocas ni guantes de látex al momento de hacerle entrega de un medicamento, agregando que les preguntó si se habían lavado las manos, y que le sugirieron que su pregunta era en forma de burla. (Fojas 4).
- 17.** Acta circunstanciada de fecha 06 de septiembre de 2020, elaborada por la licenciada Laura Elizabeth de Anda Ramírez, visitadora adjunta de este organismo, mediante la cual hizo constar que se entrevistó con “A” y dio fe de diversas lesiones con las que contaba, tomando asimismo 4 fotografías de la mismas, mismas que agregó al expediente. (Fojas 5 a 9).
- 18.** Cuatro actas circunstanciadas de fecha 06 de septiembre de 2020 elaboradas por personal de este organismo, mediante las cuales hicieron constar que se constituyeron en las instalaciones de la Estación Universidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de ciudad Juárez, con motivo de que hubo diversas personas detenidas durante una marcha ciudadana que hubo en el centro de la ciudad en contra de los feminicidios, anotando los pormenores de dicha visita así como algunas fotografías en las que se apreciaba que las detenidas de nombres “A”, “B”, “D”, “E” y “K” contaban con algunas lesiones. (Fojas 10 a 40).
- 19.** Acuerdo de acumulación de fecha 09 de septiembre de 2020, elaborado por el licenciado Jorge Jiménez Arroyo, visitador adscrito al Área de Orientación y Quejas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la oficina de ciudad Juárez mediante el cual se ordenó acumular las actas circunstanciadas que contenían las manifestaciones de “S”, “B”, “M”, “C”, “R”, “D”, “E”, “Q”, “T”, “F”, “P”, “O”, “G”, “Ñ”, “N”, y “K”, como madre de las ciudadanas “A” y “M”, “H” y “L”, en un mismo expediente. (Fojas 46 y 47).

- 20.** Actas circunstanciadas de fecha 05 de septiembre de 2020 elaboradas por personal de este organismo, que contienen las manifestaciones “S”, “B”, “M”, “C”, “R”, “D”, “E”, “Q”, “T”, “F”, “P”, “O”, “G”, “N”, y “K”. (Fojas 48 a 104).
- 21.** Acta circunstanciada de fecha 05 de septiembre de 2020, elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se asentó la queja de “O”, ya transcrita en el punto número 13 del apartado de antecedentes de la presente determinación. (Foja 87).
- 22.** Acta circunstanciada de fecha 05 de septiembre de 2020, elaborada por personal de este organismo, en la cual se hizo constar la queja de “Ñ”, ya transcrita en el punto número 12 del apartado de antecedentes de la presente determinación. (Foja 93).
- 23.** Acta circunstanciada de fecha 05 de septiembre de 2020, elaborada por personal adscrito a esta Comisión, en la cual se asentó la queja de “N”, ya transcrita en el punto número 11 del apartado de antecedentes de la presente determinación. (Foja 96).
- 24.** Acta circunstanciada de fecha 05 de septiembre de 2020, elaborada por personal de este organismo, en la cual se hizo constar la queja de “L”, ya transcrita en el punto número 10 del apartado de antecedentes de la presente determinación. (Foja 107).
- 25.** Acta circunstanciada de fecha 09 de septiembre de 2020 elaborada por el licenciado Santiago González Reyes, entonces visitador general de este organismo, mediante la cual hizo constar que realizó diversas llamadas telefónicas para tener comunicación con “L”, “K”, “N”, “D”, “Ñ”, “M”, “C”, “R”, “E”, “G” y “O” con la finalidad de darle seguimiento a sus manifestaciones y preguntarles si deseaban formalizarlas en una queja, manifestando “L”, “N”, “Ñ”, “G”, “O” y “K”, que sí deseaban dar continuidad al procedimiento iniciado con motivo de sus manifestaciones, mientras que no fue posible localizar a “M”, “C”, “R”, “D” y a “E”. (Fojas 108 y 109).

- 26.** Escrito de fecha 07 de septiembre de 2020 signado por el licenciado Laurencio Barraza Limón, entonces secretario ejecutivo de la red “Tira Paro”, dirigido al C. Héctor Armando Cabada Alvidrez, entonces presidente municipal de Juárez y al C. Raúl Ávila Ibarra, entonces Secretario de Seguridad Pública de ese municipio, con copia para este organismo, en el cual le realizaron diversas peticiones. (Fojas 111 y 112).
- 27.** Acta circunstanciada de fecha 10 de septiembre de 2020 elaborada por el licenciado Santiago González Reyes, entonces visitador general de este organismo, mediante la cual hizo constar que tuvo una reunión con personas pertenecientes a un colectivo feminista y con la quejosa “G”, quien formalizó su queja, ya transcrita en el punto número 7 de esta determinación. (Foja 117).
- 28.** Acta circunstanciada de fecha 14 de septiembre de 2020 elaborada por personal de esta Comisión, mediante la cual hizo constar que trató de localizar a la menor de nombre “R”, a fin de darle seguimiento a sus manifestaciones y preguntarle si deseaba formalizarlas en una queja, pero que al llegar al domicilio, la madre de la quejosa señaló que no quería saber nada más del asunto. (Fojas 118 y 119).
- 29.** Acta circunstanciada de fecha 14 de septiembre de 2020 elaborada por personal de esta Comisión, mediante la cual hizo constar que se trató de localizar a “S” a fin de darle seguimiento a sus manifestaciones y preguntarle si deseaba formalizarlas en una queja, pero que al llegar a su domicilio nadie atendió el llamado. (Fojas 120 y 121).
- 30.** Acta circunstanciada de fecha 14 de septiembre de 2020 elaborada por personal de esta Comisión, mediante la cual hizo constar que trató de localizar a “B” a fin de darle seguimiento a sus manifestaciones y preguntarle si deseaba formalizarlas en una queja, sin poder encontrar el domicilio que fue proporcionado. (Fojas 122 a 124).

31. Acta circunstanciada de fecha 14 de septiembre de 2020 elaborada por personal adscrito a este organismo, mediante la cual hizo constar que trató de localizar a “C” para darle seguimiento a sus manifestaciones y preguntarle si deseaba formalizarlas en una queja, pero que al llegar a su domicilio nadie atendió su llamado. (Fojas 125 a 129).

32. Oficio número SSPM/DAJ/NYSV/11743/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, signado por el licenciado Miguel Mendoza Escamilla, entonces director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, mediante el cual remitió el informe de ley solicitado por esta Comisión, mismo que fue transcrito en el punto número 10 del apartado de antecedentes (fojas 134 a 136), al que acompañó los siguientes anexos:

32.1. Copia simple del oficio número SSPK/PJ/1802/2020 de fecha de 16 de septiembre de 2020, signado por el policía primero Ricardo Alejandro Ochoa González, entonces jefe de Plataforma Juárez, dirigido al licenciado Miguel Mendoza Escamilla, entonces encargado del Despacho de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, en el que le envió información del registro de intervención, detención y/o revisión del día 05 de septiembre de 2020 de las personas de nombres “A”, “L”, “H”, “M”, “N”, “Ñ”, “G”, “O”, “P”, “F”, “Q”, “E”, “D”, “R”, “C”, “B” y “S”. (Foja 137 y 130 a 177).

32.2. Copia simple del oficio número SSPM/636/DM/2020 con fecha 25 de septiembre de 2020, signado por el doctor Luis Carlos Gutiérrez Pérez, entonces jefe del Departamento Médico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, dirigido al licenciado Miguel Mendoza Escamilla, entonces encargado del Despacho de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, mediante el cual le envió copias simples de los certificados médicos de “A”, “L”, “H”, “M”, “N”, “Ñ”, “G”, “O”, “P”, “F”, “Q”, “E”, “D”, “R”, “C”, “B” y “S”. (Foja 178).

32.3. Copia simple de los certificados médicos de “A”, “L”, “H”, “M”, “N”, “Ñ”, “G”, “O”, “P”, “F”, “Q”, “E”, “D”, “R”, “C”, “B” y “S” de fecha 05 de septiembre de 2020, elaborados por el médico adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Juárez. (Fojas 178 a 195).

33. Acta circunstanciada de fecha 07 de octubre de 2020, elaborada por el licenciado Santiago González Reyes, entonces visitador general de este organismo, mediante la cual hizo constar que “D” ratificó su queja, misma que quedó debidamente transcrita en el punto número 4 del apartado de antecedentes de esta resolución. (Foja 196).

34. Acuerdo de acumulación de fecha 09 de octubre de 2020, mediante el cual el licenciado Jorge Jiménez Arroyo, visitador del Área de Orientación y Quejas de este organismo en la oficina de ciudad Juárez, acumuló las quejas de “I”, “J” y “K” a la queja que ahora se resuelve. (Fojas 199 y 200).

35. Escrito de queja de “I”, “J” y “K”, sin fecha, recibido en este organismo el día 09 de septiembre de 2020, ya transcrita en el punto número 9 de esta determinación. (Fojas 201 a 203).

36. Acta circunstanciada de fecha 09 de octubre de 2020, elaborada por el licenciado Santiago González Reyes, visitador general de este organismo, mediante la cual hizo constar que “B”, “C”, “E”, “F” y “H” ratificaron sus respectivas quejas, mismas que fueron transcritas en los puntos 2, 3, 5, 6 y 8 del apartado de antecedentes de esta resolución. (Foja 211).

37. Evaluación Psicológica para Casos de Posible Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes de fecha 21 de octubre de 2020, realizada a “D” por parte del licenciado Damián Andrés Díaz García, psicólogo adscrito a esta Comisión. (Fojas 220 a 228).

38. Oficio número SSPM/DAJ/NYSV/13418/2020 de fecha 27 de octubre de 2020, signado por el licenciado Miguel Mendoza Escamilla, entonces director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, mediante el cual remitió el informe complementario solicitado por esta Comisión. (Fojas 230 a 233), al que anexó lo siguiente:

38.1. Treinta y tres fotografías de los daños que presuntamente habrían ocasionado las quejas. (Fojas 234 a 237).

38.2. Oficio número 1558/2020 de fecha 17 de octubre de 2020, signado por el oficial Uriel de la Cruz Cruz, entonces jefe del C.E.R.I 9-1-1, dirigido al licenciado Miguel Mendoza Escamilla, entonces encargado del Despacho de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, mediante el cual le informó que no se contaba con cámaras de videovigilancia que estuvieran enlazadas con el centro de emergencias del cual era jefe. (Foja 238).

39. Evaluación Psicológica para Casos de Posible Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes de fecha 11 de noviembre de 2020, realizada a “K” por parte del licenciado Damián Andrés Díaz García, psicólogo adscrito a esta Comisión. (Fojas 240 a 247).

40. Acta circunstanciada de fecha 25 de noviembre de 2020, elaborada por personal de este organismo, mediante la cual hizo constar que recabó un video de la plataforma digital denominada como “Youtube”, dando fe de que éste contenía imágenes relacionadas con los hechos materia de la queja. (Fojas 248 a 250).

41. Escrito de fecha 28 de octubre de 2020 signado por la quejosa “D”, mediante el cual realizó diversas manifestaciones en relación al informe rendido por la autoridad. (Fojas 254 y 255).

42. Evaluación Psicológica para Casos de Posible Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes de fecha 08 de abril de 2021, realizado en la

persona de "B", realizada por el licenciado Damián Andrés Díaz García, psicólogo adscrito a este organismo. (Fojas 259 a 268).

III.- CONSIDERACIONES:

- 43.** Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en el presente asunto, atento a lo dispuesto por el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, párrafo tercero, inciso A, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los numerales 3 y 6, fracciones I y II, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como 6, 12 y 84, fracción III, del Reglamento Interno de este organismo.

- 44.** Según lo establecido en los artículos 39 y 40, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, resulta procedente, por así permitirlo el estado que guarda la tramitación del presente asunto, analizar los hechos, los argumentos y las pruebas, así como los elementos de convicción recabados y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o las personas servidoras públicas han violado o no derechos humanos, al haber incurrido en actos ilegales o injustos, por lo que las pruebas recabadas durante la investigación, deberán ser valoradas en su conjunto de acuerdo a los principios de la lógica y la experiencia, con estricto apego al principio de legalidad que demanda nuestra carta magna para que, una vez realizado ello, se pueda producir convicción sobre los hechos materia de la presente queja.

- 45.** Asimismo, este organismo precisa que no se opone a la prevención, investigación y persecución de la comisión de faltas administrativas por parte de las autoridades, sino a que con motivo de estas actividades, se vulneren los derechos humanos, al hacerse patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la realización de conductas que constituyan delitos y faltas administrativas, con los medios a su alcance, a fin de que en el ámbito de su competencia, identifiquen a las personas responsables y

logren que se les impongan las sanciones legales correspondientes, con apego a derecho y respeto a los derechos humanos.

46. Es por ese motivo, que la presente resolución no constituye un pronunciamiento respecto a la participación y/o responsabilidad de las quejas en las faltas que se les atribuyeron, y se ocupará únicamente en determinar si con motivo de los hechos reclamados ante este organismo, se acreditó alguna violación a sus derechos humanos.

47. Del escrito inicial de queja y del informe rendido por la autoridad, tenemos que la controversia se centra en que las quejas se duelen de que el día 05 de septiembre de 2020, al estar participando de forma pacífica en una marcha por los derechos de las mujeres y para manifestar su rechazo al abuso policial, debido a un hecho que había sucedido días atrás en León, Guanajuato, diversos agentes pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, comenzaron a detenerlas y a golpearlas sin ningún motivo, y que una vez estando detenidas en dichas instalaciones, no se les permitió el acceso a una defensa o persona que las asistiera, ni se les permitió realizar manifestación alguna en su defensa, mientras que la autoridad en su informe, señaló que procedió a detener a las impetrantes, en razón de que éstas se encontraban gritando palabras altisonantes y habían agredido a personas del sexo masculino verbalmente con mismas palabras, quienes también habían sacado pinturas en aerosol, simulando que los iban a pintar, por lo que se les informó que su conducta constituía una falta administrativa contemplada en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Juárez, en el artículo 6 fracción I, y se les habían asegurado seis latas de pintura en aerosol de varios colores, un bate de color rojo de aluminio y dos mantas con diversas leyendas, afirmando que se había actuado en cumplimiento a lo establecido en los artículos 41 y 43 fracciones VI y IX del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del municipio de Juárez, sin transgredir derechos, ya que se había tratado de hacer prevalecer la seguridad y tranquilidad social, además de que se les había realizado un examen físico a las detenidas, y se había certificado que no había existido el empleo de fuerza durante su detención, menos aún que se empleara el uso excesivo

de la misma, señalando que dichos certificados se contraponían con lo señalado por las quejas.

- 48.** De las manifestaciones de las partes, esta Comisión advierte que son cuestiones relativas a los derechos humanos a la libre manifestación de las ideas, difusión de opiniones, de reunión, legalidad, seguridad jurídica, integridad personal y defensa, así como aquellas relacionadas con las faltas administrativas, las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, previstas en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Juárez y el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del municipio de Juárez, respectivamente, así como del uso legítimo de la fuerza, por lo que previo a entrar al estudio de los hechos y las evidencias que obran en el expediente, este organismo considera que deben establecerse algunas premisas legales y criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de comprender con mayor claridad el contexto de la queja y los derechos humanos que las personas quejas aducen que les fueron vulnerados por parte de autoridad.
- 49.** En cuanto a la libre manifestación de las ideas y difusión de opiniones, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente:

“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado...”

“Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de

enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.”

50. Por lo que hace la libertad de reunión, el diverso artículo 9 de la misma carta magna, establece lo siguiente:

“Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”

51. En lo que corresponde los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, el segundo párrafo del artículo 14 y primer párrafo del artículo 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen:

“Artículo 14. (...)

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho...”

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo...”

52. En cuanto a la integridad personal, el artículo 5.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece:

“Artículo 5.- Derecho a la Integridad Personal.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral...”

53. En relación al derecho de defensa en materia administrativa, el artículo 24 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Juárez, dispone:

“Artículo 24.- El juez hará saber al infractor que tiene derecho a comunicarse con persona que lo asista o lo defienda, en caso de que así lo desee, le permitirá el uso del teléfono sin costo alguno en llamadas locales y suspenderá el proceso de calificación por un tiempo razonable para la llegada de la persona en cuestión.

Cuando no se comunique al presunto infractor este derecho o impida el ejercicio del mismo, se impondrá a la persona responsable, una multa equivalente a tres días de salario mínimo, independientemente del delito de abuso de autoridad que se pudiere cometer. La reincidencia de esta falta ya sea por el juez calificador o por el funcionario público responsable, es causa fundada para la inmediata separación de su cargo.”

54. Asimismo, el referido ordenamiento, establece en su artículo 6, fracción I, que:

“Artículo 6. Son faltas o infracciones contra el orden, la seguridad y tranquilidad de las personas:

I. Causar escándalos en lugares públicos, así como poner en riesgo la tranquilidad, la integridad o seguridad de las personas; ...”.

55. Los artículos 41 y 43 fracciones VI y IX del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del municipio de Juárez, que invocó la autoridad, establecen:

“Artículo 41. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, estará a cargo de un Secretario, que tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Organizar, preparar y dirigir a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a su personal, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y sus Municipios, en el Reglamento del Sistema Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua y en los demás ordenamientos legales aplicables en materia de seguridad pública;*
- II. Mantener la seguridad, tranquilidad, moralidad y orden público;*
- III. Prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, y salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;*
- IV. Proporcionar el auxilio necesario a las autoridades competentes, en caso de siniestros, emergencias o desastres;*
- V. Cuidar la observancia de los reglamentos en materia de seguridad pública y seguridad vial del Municipio de Juárez;*

- VI. *Auxiliar en asuntos de su competencia a las autoridades municipales, estatales y federales, cuando sean requeridos legalmente para ello;*
- VII. *Mantener el orden público dentro de la jurisdicción del Municipio y proteger los intereses de la propia sociedad; Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.*
- VIII. *Tomar las medidas necesarias para prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas;*
- IX. *Administrar y vigilar las detenciones preventivas municipales, procurando que las mismas se den en circunstancias de seguridad e higiene de acuerdo a la dignidad que como personas les corresponde a los detenidos;*
- X. *Vigilar y hacer cumplir en el ámbito municipal el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua y demás ordenamientos legales aplicables en la materia, pudiendo solicitar para estos efectos la colaboración de otras autoridades en los términos de su respectiva competencia, y*
- XI. *Las demás que le encomiende el Presidente y las que le confieran las leyes, reglamentos y manuales de organización y procedimientos.*

(...)”

“Artículo 43. Son atribuciones de la Coordinación General de Policía:

VI. Coordinar los mecanismos de enlace e intercambio de información institucional con las diversas autoridades en los tres niveles de gobierno;

(...)

IX. Actualizar incidencias delictivas con la Jefatura de Estadísticas;”

56. Por último, en cuanto al uso legítimo de la fuerza, la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, establece en su artículo 4, lo siguiente:

“...Principios del Uso de la Fuerza

Artículo 4. El uso de la fuerza se regirá por los principios de:

I. Absoluta necesidad: para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor;

II. Legalidad: para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;

III. Prevención: para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, cuando esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar;

IV. Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, y

V. Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que permitan la evaluación de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por esta Ley.”

57. Establecido el contexto jurídico en el que ocurrieron los hechos, corresponde ahora realizar un análisis de los mismos, así como de las evidencias que obran en el expediente, en el entendido de que solo se analizarán las quejas de “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “N”, “Ñ” y “O”, ya que a las personas de nombre

“M”, “P”, “Q”, “R” “S” y “T”, no fue posible localizarlas para que ratificaran sus quejas, o no las ratificaron.

58. En ese tenor, tenemos que tanto las quejas de las impetrantes, como del informe rendido por la autoridad, coinciden en que el día 05 de septiembre de 2020, se llevó a cabo una marcha en la que resultaron detenidas las quejosas, por parte de agentes pertenecientes a la Policía Municipal de Juárez, por lo que al no existir controversia al respecto, debe tenerse por cierto ese hecho, restando por dilucidar si la autoridad se ajustó al marco jurídico existente o si actuó fuera del mismo al momento de hacerlo.

59. En relación a esto, las impetrantes señalaron en sus respectivas quejas, que el día de los hechos se encontraban realizando una marcha en la avenida Juárez, de forma pacífica, ya que se encontraban pugnando por los derechos de las mujeres y en contra del abuso policial, como protesta por hechos que habían ocurrido días antes en León, Guanajuato, pero que de forma repentina, los agentes de la Policía Municipal que se encontraban presentes, comenzaron a detener sin motivo a muchas personas que formaban parte de la marcha, a quienes además estaban maltratando o golpeando para subirlas a las patrullas, señalando las quejosas que no habían hecho nada para ser detenidas y mucho menos para recibir el trato que les dieron.

60. Para dilucidar esto, se cuenta en el expediente con el informe de la autoridad y las constancias que acompañó al mismo (visibles a fojas 134 a 177 del expediente), destacándose los informes policiales homologados que se elaboraron con motivo de la detención de las impetrantes, de los que se desprende que las agentes de policía de nombres “U” y “V”, al estar realizando un recorrido de vigilancia a bordo de la unidad “W” de seguridad pública municipal, se percataron de que en el cruce de las calles avenida Juárez y Abraham González, en la zona centro, se percataron de que un grupo de mujeres se encontraban gritando palabras altisonantes, tales como *“pinchis violadores culeros, gobierno de mierda, váyanse a la verga, chinguen a su madre, le tienen miedo a los sicarios”*, y que en ese momento, pasaron por la

calle personas del sexo masculino, quienes también fueron agredidos verbalmente con las palabras antes mencionadas, sacando en ese momento pinturas en aerosol, simulando que los iban a pintar, por lo que las personas salían corriendo y ellas los perseguían, siendo esta la razón por la que los agentes de policía procedieron a detener a dichas mujeres, comunicándoles que su actuar constituía una falta administrativa al Bando de Policía y Buen Gobierno prevista en el artículo 6, fracción I³, asegurándoles en el momento seis latas de pintura en aerosol, un bate de color rojo de aluminio, dos mantas con la leyenda *“Mujeres en rebelión, uniendo voces por la libertad, militarización en feminicidio y desaparición, mujeres contra guerra”*, así como una cartulina en color blanco con la leyenda *“la policía no me cuida, me cuidan las mujeres organizadas, con el poder de las mujeres, el miedo cambió de bando, pienso, luego estorbo.”*

61. Asimismo, de los informes policiales homologados de las personas detenidas, se desprende que el apartado del uso de la fuerza, se encuentra en blanco, señalando la autoridad en su informe, que no existió un empleo del uso de la fuerza en la detención de las impetrantes, y que menos aún, se había realizado de forma excesiva. Cabe señalar que en dichos informes, no obra el inventario de objetos asegurados o encontrados en las personas detenidas.
62. En el expediente obran también el acta circunstanciada de fecha 06 de septiembre de 2020, elaborada por la licenciada Laura Elizabeth de Anda Ramírez, visitadora adjunta de este organismo, mediante la cual hizo constar que “A” contaba con diversas lesiones, de las cuales tomó cuatro fotografías (constancias visibles a fojas 5 a 9), así como cuatro actas circunstanciadas de esa misma fecha, elaboradas por personal de este organismo, mediante las cuales hicieron constar que tomaron diversas fotografías, en las que se aprecia que las detenidas de nombres “A”, “B”, “D”, “E” y “K”, contaban con algunas lesiones (constancias visibles a fojas 10 a 40), y se cuenta también con copia simple de los certificados médicos que se les hicieron a “A”, “L”, “H”, “N”, “Ñ”, “G”, “O”, “F”, “E”, “D”, “C” y “B”, de fecha 05 de septiembre

³ Artículo 6.- Son faltas o infracciones contra el orden, la seguridad y tranquilidad de las personas:

I. Causar escándalos en lugares públicos, así como poner en riesgo la tranquilidad, la integridad o seguridad de las personas.

de 2020, elaborados por el médico adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Juárez, en los cuales se hizo constar que “A” presentaba escoriaciones en el cuello, abdomen y ambas muñecas; “L” se encontró sin lesiones visibles; “H” presentaba equimosis en antebrazo derecho; “N”, se encontró sin lesiones visibles; “Ñ” igualmente sin lesiones visibles; “G” tenía una equimosis en el antebrazo izquierdo; “O” presentaba escoriaciones en el cuello, brazo izquierdo y en ambas muñecas; “F” tenía una equimosis en antebrazo izquierdo; “E” presentaba una escoriación en mucosa de labio superior; “D” tenía aumento de volumen en región occipital; “C” se encontró sin lesiones visibles; y “B” presentaba eritemas en ambos antebrazos. (Visibles en fojas 179, 180, 181, 183, 184, 186, 188, 190, 191 y 194 del expediente, respectivamente).

63. De acuerdo con dichas evidencias, esta Comisión advierte que existe una contradicción entre el informe y los documentos aportados por la autoridad, con las evidencias recabadas por esta instancia, ya que mientras que la autoridad informó que no se empleó la fuerza pública en contra de algunas de las agraviadas y que no se les maltrató en alguna forma, este organismo constató que algunas de las impetrantes presentaron lesiones con posterioridad a su detención por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Juárez, las que si bien es cierto que de acuerdo a los principios de la lógica y la experiencia, coinciden con aquellas que pudieran ser a consecuencia de las técnicas de sometimiento empleadas en ellas, cierto es también que la autoridad no las justificó, ni señaló los motivos por los que en su caso, hubiera existido la necesidad de aplicarles alguna técnica de arresto que explicara dichas lesiones, y por lo tanto, debe considerarse que la causación de las mismas, es atribuible a los agentes de la autoridad, deduciéndose que se empleó en las quejas una fuerza excesiva, que trajo como consecuencia que algunas de ellas resultaran lesionadas, en contravención a lo dispuesto en el artículo 4, fracciones I y IV de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y el artículo 5.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

64. Lo anterior, porque la autoridad no demostró que hubiere hecho uso de la fuerza bajo los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad, como últimas alternativas para tutelar la integridad de las personas, o con el fin de mantener el orden y la paz pública, o que hubieren agotado otros medios para el desistimiento de las conductas que supuestamente alteraron el orden público, ya que las lesiones que se apreciaron en las quejas, aunque son leves, no son proporcionales a la conducta que desplegaron durante la manifestación en la que participaron y a lo que la autoridad asentó en los informes policiales homologados, pues de las evidencias que obran en el expediente, no se desprende que hubieren ofrecido resistencia a sus arrestos, o que hubieran representado un nivel de riesgo tal, que los agentes se hubieran visto obligados a emplear métodos de arresto, en los que necesariamente se tuviera que lesionar a las impetrantes, pues se insiste en que los agentes de policía, no hicieron ninguna anotación en el apartado del uso de la fuerza en los informes de referencia, estableciendo únicamente que a las impetrantes se les había detenido por faltas administrativas.

65. En consecuencia, este organismo considera que la autoridad no aportó una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido, ni desvirtuó las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados, y por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dicha circunstancia debe tener el efecto de que en relación con el trámite de la queja, deban tenerse por ciertos los hechos materia de la misma, además de que existen evidencias en el expediente que desvirtúan la versión de la autoridad.

66. Apoya a la consideración anterior, la siguiente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

“...La jurisprudencia de este Tribunal también ha señalado que siempre que una persona es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación creíble de esa situación. En consecuencia, existe la presunción

de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.⁴

67. Del mismo modo, la autoridad no justificó la detención de las impetrantes, pues en primer término, no puede perderse de vista el contexto en el que sucedieron los hechos, ya que las quejas se encontraban realizando una marcha por los derechos de las mujeres y en contra de la represión policial, por lo que al reunirse con ese fin, es entendible que lanzaran consignas en contra de la autoridad o emplearan palabras altisonantes, entre otras, de tal manera que no puede considerarse que se hicieron con el ánimo o intención de alterar el orden público en términos del artículo 6, fracción I, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Juárez, sino en todo caso, en el de ejercer los derechos contenidos en los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que las reuniones para esos efectos y la manifestación de las ideas que se realicen en ellas, no pueden ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, censura previa o consideradas como ilegales, si tienen por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, aun y cuando se realicen tales expresiones, ya que si bien es cierto que la propia carta magna establece que las únicas limitantes que tienen esos derechos, es que no se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público, o se profieran injurias contra la autoridad, cierto es también que dichas excepciones, solo operan en el caso de que quienes realicen dichos actos, tengan la intención de intimidar a la autoridad u obligarla a resolver en el sentido que se desee, de lo cual no existe evidencia en el expediente.

⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Cabrera García y Montiel flores vs. México*. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Párrafo 134.

68. Al respecto, debe decirse que la libertad de expresión en el marco de las protestas sociales debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población por el tipo de reclamo que involucran. Esta presunción general de cobertura de todo discurso expresivo se explica por la obligación primaria de neutralidad del Estado ante los contenidos y, como consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en principio, no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos *a priori* del debate público.⁵

69. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado en diversos informes que el artículo 13 de la Convención Americana abarca el derecho de las personas a expresar su orientación sexual e identidad de género, y que este tipo de expresión goza de un nivel especial de protección bajo los instrumentos interamericanos, en tanto se relaciona con un elemento integral de la identidad y la dignidad personal.⁶ Del mismo modo, dicha Corte ha destacado la importancia de la libertad de expresión para proteger los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

70. En cuanto a esto último, cabe destacar que el artículo 2, inciso c), 3, 5 y 7, incisos a) y b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de Belem do Pará), establece lo siguiente:

“Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”.

Artículo 3. Toda Mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

⁵ Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010, párr. 30.

⁶ CIDH, Violencia contra personas LGBTI, 2017, párr. 80

Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Artículo 7. Los Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

71. Es por esa razón que en el caso, deben prevalecer sobre el artículo 6, fracción I, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Juárez, las normas constitucionales invocadas en el párrafo que antecede, ya que en una ponderación de derechos, es decir, la libertad de expresión, difusión de opiniones y de reunión, frente a lo que consideraron los agentes de policía que constituía una alteración del orden público, al lanzar las impetrantes diversas consignas y palabras altisonantes en contra de la autoridad, debe decirse que conforme a la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, *“...las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores, entre otras, gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático. La Corte ha señalado que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en*

la esfera del debate público. Este umbral no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza⁷...” y que “...En cuanto al carácter de interés público, en su jurisprudencia, la Corte ha reafirmado la protección a la libertad de expresión respecto de las opiniones o informaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias importantes⁸...”.

72. Asimismo debe tomarse en cuenta que en la sociedad actual, las mujeres aún enfrentan obstáculos estructurales y prácticas discriminatorias, basadas en el género, además de otros factores, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la edad, la clase, la orientación sexual y la identidad de género, que les impiden ejercer en iguales condiciones que los hombres, entre ellos, su derecho a expresar públicamente sus ideas y opiniones y recibir información.

73. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el impacto de estas prácticas discriminatorias es particularmente grave en el caso de mujeres que ejercen la libertad de expresión de manera activa y mantienen un alto perfil público, tales como las mujeres defensoras de derechos, pues al desafiar estereotipos machistas que reprobaban su participación en la vida pública, se ven enfrentadas a la violencia y la discriminación contra las mujeres basada en su género, a formas diferenciadas de violencia por parte de actores estatales y no estatales, y a desprotección y obstáculos en el acceso a la justicia, también diferenciados de sus compañeros varones.⁹

74. Lo anterior, no significa que este organismo justifique la violencia al ejercer los derechos establecidos en los artículos 6, 7 y 9 de la constitución federal, o que desconozca que conforme al artículo 15 de la Convención Americana Sobre

⁷ Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Fontevecchia y D'amico vs. Argentina*. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Fondo, reparaciones y costas. Párrafo 47.

⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Fontevecchia y D'amico vs. Argentina*. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Fondo, reparaciones y costas. Párrafo 61.

⁹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión*, 2018, p.11.

Derechos Humanos, el derecho de reunión debe ejercerse de forma pacífica y sin armas, ni pasa por alto que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público y emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento, en caso de ser necesario.

75. Sin embargo, tal y como lo establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, *“... Si bien los Estados gozan de un cierto grado de discreción al evaluar el riesgo al orden público, a efecto de disponer el uso de la fuerza, esa discrecionalidad no es ilimitada ni carece de condiciones, particularmente cuando se trata de reuniones, protestas o manifestaciones protegidas por el artículo 15 de la Convención. Corresponde al Estado demostrar que adoptó las medidas estrictamente necesarias y proporcionales para controlar el riesgo percibido al orden público o a los derechos de las personas, sin restringir o violentar innecesariamente el derecho a la reunión pacífica de las demás personas. Al respecto, esta Corte ya ha señalado que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección y control de los civiles¹⁰...”,* ya que *“...la presencia de unas pocas personas que cometen actos de violencia dentro y alrededor de una protesta no autoriza a la policía para etiquetar como violenta a la manifestación completa ni concede al Estado carta blanca para (...) detener indiscriminadamente a todos. En dichos casos, la conducta violenta no debe presumirse ni debe considerarse responsables a los organizadores de la protesta por el comportamiento violento de otros; por el contrario, la policía debe individualizar y retirar a las personas violentas de la multitud para que las demás personas puedan ejercer sus derechos¹¹...”,* y que *“...En resumen, la Corte considera que, a efectos de evitar la arbitrariedad en las detenciones colectivas, los Estados deben: (I) individualizar y separar las conductas de cada una de las personas detenidas, de forma de demostrar que existen indicios razonables, basados en información objetiva, de que cada persona detenida se encuadra en*

¹⁰ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso *mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México*. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Párrafo 167.

¹¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso *Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México*. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Párrafo 240.

alguna de las causas de detención previstas en sus normas internas acordes con la Convención; (II) ser necesaria y proporcional para garantizar algún propósito permitido por la Convención, tales como el interés general, así como (III) estar sujeta a control judicial, además de las demás condiciones del artículo 7 de la Convención Americana¹²...

76. Lo anterior se trae al caso, porque la autoridad no demostró que las quejas, hubieran sido quienes agredieron con palabras altisonantes a diversas personas del sexo masculino que coincidieron con la marcha o manifestación en la vía pública, o amagaran a dichas personas con pintarlas portando las seis latas de pintura en aerosol, o con golpearlas con el bate color rojo de aluminio que supuestamente traían, toda vez que de los informes policiales homologados que se hicieron con motivo de la detención de las impetrantes, mismos que allegó la autoridad a este organismo junto con su informe, no se desprende que hubieren individualizado en la narrativa de hechos, quién de las detenidas se encontraba realizando alguno de esos actos, a fin de que se detuviera únicamente a esas personas y no a quienes nada tenían que ver con los mismos, o que se hubieran realizado las debidas actas de inventario, de objetos asegurados o la respectiva cadena de custodia, tal y como lo exigen los artículos 40, fracción XI, y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 65 fracción V de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los cuales hacen referencia a que para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes las instituciones de seguridad pública, deben sujetarse, entre otras, a la obligación de utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia, que en el caso de las detenciones, deberá contener una descripción de los objetos que les fueron encontrados a las personas detenidas, lo cual no ocurrió en el caso, por lo que este organismo considera que la autoridad violó las formalidades esenciales de sus procedimientos, y por lo tanto, violó los derechos humanos de las impetrantes a la

¹² Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México*. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Párrafos 240 y 241.

legalidad y a la seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

77. Lo anterior, se ve reforzado con las actas circunstanciadas de fecha 06 y 07 de septiembre de 2020, elaboradas por el licenciado Santiago González Reyes (visibles en fojas 10 y 11, y 21 a 25), quien en uso de las facultades que le confiere el artículo 16 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos¹³, asentó en dicha acta que presencié las audiencias de las impetrantes ante la jueza cívica o de barandilla, por las supuestas faltas que habían cometido, quien al inicio de la audiencia les manifestó cuestiones como “*si usted estuvo ahí* (en referencia a la marcha) *participó en el vandalismo*”, diciendo que se les había encontrado un bate de béisbol, señalando el visitador que dicho bate era sólo uno y las detenidas eran más de veinte, fijándoles una multa a cada una, sin haberles demostrado o aportado algún elemento de que hubieran participado en los daños de los que se les acusaba, y que en ningún momento le permitió a las quejas la oportunidad de ser escuchadas o que sus manifestaciones sirvieran de base para que dicha juzgadora tuviera elementos para determinar si había existido alguna responsabilidad, y para valorar en su caso la sanción administrativa que debía aplicarse, ya que de acuerdo con dichas actas, cuando las detenidas intentaban mencionar o señalar cualquier cuestión relacionada con los hechos que se estaban tratando, las confrontaba mencionándoles que no era el momento de hacer tales consideraciones y que en su momento tendrían la oportunidad de hacerlo, pero que nunca se les otorgó.

78. Asimismo, de las actas elaboradas por el personal de este organismo, concretamente de la realizada por la licenciada Laura Elizabeth de Anda Ramírez, en su carácter de visitadora adjunta (visible en fojas 13 a 19 del expediente), no se desprende que la juez cívica, le hubiere informado a las detenidas que tenían derecho a comunicarse con alguna persona que las asistiera o defendiera, a pesar de que dicha visitadora le hizo esa observación a diversos funcionarios del municipio

¹³Artículo 16. El Presidente de la Comisión y los visitadores en sus actuaciones tendrán fe pública para certificar la veracidad de los hechos en relación con las quejas o inconformidades presentadas ante la Comisión Estatal.

con los que interactuó, cuando trató de gestionar la situación en la que se encontraban las quejas, actuar que esta Comisión considera que fue contrario a lo dispuesto por los artículos 23¹⁴ y 24¹⁵ del Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Juárez, constituyéndose una nueva violación no solo a los derechos de legalidad y seguridad jurídica de las impetrantes, al no haberse seguido las formalidades esenciales del procedimiento, sino también una vulneración a sus derechos de defensa, previstos en esos numerales.

79. Del mismo modo, los señalamientos de “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J” y “K”, “L”, “N”, “Ñ”, “O”, ya asentados en los puntos en los puntos 1 a 13 de la presente determinación, vienen a reforzar las consideraciones que anteceden, en cuanto a sus derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, pues coinciden en que fueron detenidas sin un motivo aparente, cobrando especial relevancia, el testimonio de “Q” (visible en foja 74 del expediente), quien aunque no ratificó su queja, no por ello deja de ser un indicio relevante que viene a reforzar el dicho de las quejas en ese sentido, pues ésta señaló que el día de los hechos “...*me encontraba en la calle Juárez, en el centro, por donde está el banco Santander, estaba en compañía de mi hija “T”, de 18 años de edad, habíamos ido a comprar una pizza, acababa de salir del cajero para comprarla, cuando un policía llega y jalona a mi hija y dice “órale, tú vas para arriba también”, yo alcancé a agarrar a mi hija de la cintura, abrazándola, se dejaron venir otros cuatro oficiales al verme, le dije que por qué se la querían llevar si nosotros no andábamos en la marcha, un oficial me dijo que me callara y empezamos a forcejear, me ordenaban que la soltara y nos empezaron a jalar del cabello para separarnos y tratar de llevarse a mi hija, nos jalaban de forma violenta de los antebrazos, por lo que también nos rasguñaron. Nos empezaron a*

¹⁴ Artículo 23.- El procedimiento ante el juez será oral y público, salvo que por motivos de moral u otros hechos graves, se resuelva que se desarrolle en privado; concentrándose a una audiencia en que se recibirán y desahogarán las pruebas, escuchándose además al presunto infractor para dictar la resolución respectiva.

¹⁵ Artículo 24.- El juez hará saber al infractor que tiene derecho a comunicarse con persona que lo asista o lo defienda, en caso de que así lo desee, le permitirá el uso del teléfono sin costo alguno en llamadas locales y suspenderá el proceso de calificación por un tiempo razonable para la llegada de la persona en cuestión. Cuando no se comunique al presunto infractor este derecho o impida el ejercicio del mismo, se impondrá a la persona responsable, una multa equivalente a tres días de salario mínimo, independientemente del delito de abuso de autoridad que se pudiere cometer. La reincidencia de esta falta ya sea por el juez calificador o por el funcionario público responsable, es causa fundada para la inmediata separación de su cargo.

empujar y jalonear hasta que nos subieron a una patrulla y nos trajeron a la estación, donde las agentes femeninas se han portado muy hostiles, nos hicieron comentarios de que si nos hubiéramos quedado en la casa, esto no nos hubiera pasado...". (Sic).

80. Por lo anterior, a la luz de la normatividad nacional e internacional antes invocada, y con las evidencias reseñadas, se puede concluir válidamente, que "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "N", "Ñ" y "O", fueron objeto de violaciones a sus derechos humanos a libre manifestación de las ideas, difusión de opiniones, de reunión, legalidad, seguridad jurídica, integridad personal y defensa, por parte de personal perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, habida cuenta de las omisiones antes apuntadas.

IV.- RESPONSABILIDAD:

81. La responsabilidad generada con motivo de las violaciones a los derechos humanos analizadas y evidenciadas, corresponde a los actos u omisiones realizadas por las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, cuyas omisiones incidieron en las violaciones a derechos humanos antes acreditadas en perjuicio de "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "N", "Ñ" y "O", quienes contravinieron las obligaciones establecidas en los artículos 7, fracción I, V, VII, IX y 49 fracción I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prevén que las personas servidoras públicas deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, actuando conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas correspondientes a su empleo, cumpliendo con sus funciones y atribuciones encomendadas, observando disciplina y respeto y que así lo hagan las personas servidoras públicas sujetas a su cargo, lo que además implicó incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público, que han sido precisadas.

82. En ese orden de ideas, al incumplir con las obligaciones establecidas en las fracciones I, II, V, VI, IX, XII, XIII, XIV y XXV del artículo 65 y el diverso 173, ambos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, relativos a observar un trato respetuoso con las personas, absteniéndose de todo acto arbitrario, actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias, utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública, cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciban con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento, cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna, abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en las disposiciones constitucionales y legales aplicables, velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de hechos presumiblemente delictivos o de faltas administrativas, de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente, abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la Institución, dentro o fuera del servicio, resulta procedente instaurar procedimiento administrativo en el que determine el grado de responsabilidad en que incurrió el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, con motivo de los hechos materia de la presente resolución.

V.- REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO:

83. Por todo lo anterior, se determina que “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “N”, “Ñ” y “O”, tienen derecho a la reparación integral del daño sufrido en virtud de los hechos que motivaron el expediente en análisis, en los términos de la jurisprudencia que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con base en la obligación para el Estado de reparar las violaciones a los derechos humanos, considerando además que la responsabilidad del mismo, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa, según lo dispuesto en los

artículos 1, párrafo tercero y 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 178, antepenúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

84. Al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible al Estado, la Recomendación formulada debe incluir las medidas efectivas de restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, para lo cual el Estado deberá de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Para tal efecto, en términos de los artículos 1, 2, fracción I, 4, 7, 27, 67, 68, 88 fracción II, 96, 97 fracción II, 106, 110 fracción IV, 111, 112, 126 fracción VIII, 130, 131 y 152, de la Ley General de Víctimas; 6, 20, fracción II, 22, fracciones IV y VI, 36, fracción IV, 37, fracciones I y II y 39, de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, se deberá reparar el daño de manera integral a “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “N”, “Ñ” y “O” por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y que han quedado precisadas en la presente Recomendación, así como su inscripción ante el Registro Estatal de Víctimas. Debiendo tenerse como parámetro para la reparación integral del daño, lo siguiente:

a) Medidas de rehabilitación.

84.1. Las medidas de rehabilitación, pretenden reparar las afectaciones físicas, psíquicas o morales que puedan ser objeto de atención médica o psicológica. Para esa finalidad, previo consentimiento de las víctimas, la autoridad deberá garantizarles a “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “N”, “Ñ” y “O”, la atención médica y psicológica que requieran de forma gratuita, en caso de que así lo requieran, ya que al menos la quejosa “I” manifestó en su queja que después de los hechos, necesitó atención médica particular y la atención urgente de su psicóloga para recibir contención emocional, a fin de que en su momento alcancen el máximo grado de rehabilitación posible respecto de las afectaciones sufridas a causa de la violación a sus derechos humanos a la integridad personal,

mismas que fueron acreditadas, según las consideraciones realizadas en la presente determinación.

b) Medidas de satisfacción.

84.2. La satisfacción, como parte de la reparación integral, busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas. Este organismo derecho humanista considera, que la presente Recomendación constituye por sí misma, una forma de reparación como medida de satisfacción, así como en su caso lo será la aceptación de la presente por parte de la autoridad.

84.3. De las constancias que obran en el sumario, no se desprende que se haya iniciado algún procedimiento administrativo disciplinario en contra del personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, que hubieren participado en los hechos materia de la presente resolución, por lo que la autoridad deberá agotar las diligencias necesarias para que se inicie, integre y resuelva conforme a derecho, el procedimiento administrativo que corresponda en contra de las personas servidoras públicas involucradas, y en su caso, se impongan las sanciones que correspondan.

b) Medidas de no repetición.

84.4. Estas consisten en implementar las medidas que sean necesarias para conseguir que los hechos violatorios de derechos humanos, no se repitan.

84.5. En ese tenor, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, deberá brindar capacitación y adiestramiento a sus integrantes, con especial atención a la ética policial, la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y los derechos humanos con perspectiva de género, desde su formación inicial, de manera permanente y continua, tal y como se encuentra previsto en el artículo 287 de la Ley del Sistema Estatal de

Seguridad Pública, a fin de que todos los procedimientos policiales se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a los deberes de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

- 84.6.** Asimismo, deberá capacitar a sus agentes en la utilización de las actas de inventario, objetos asegurados y cadena de custodia, tal y como lo exigen los artículos 40, fracción XI, y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 65 fracción V de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a fin de que sus agentes estén en posibilidad de establecer con certeza lo que porta cada detenido, y en su caso, atribuir las faltas administrativas a quien corresponda, atendiendo a las consideraciones realizadas en los puntos 63 a 70 de esta resolución.
- 84.7.** Por último, para que se capacite a quienes funjan como personas juzgadoras cívicas o de barandilla, a fin de que les informen a las personas detenidas que tienen derecho a comunicarse con alguna persona que las asista o defienda, y se apeguen a las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a lo dispuesto por los artículos 23 a 31 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Juárez, las consecuencias de no hacerlo y se les instruya para que se abstengan de prejuzgar a los detenidos, cuando no cuenten con evidencia concreta de las faltas administrativas que se les atribuyen.
- 85.** Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo prescrito por los artículos 28, fracciones III y XXX; 29, fracción IX, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, resulta procedente dirigirse al presidente Municipal de Juárez, para los efectos que más adelante se precisan.
- 86.** En virtud a lo señalado en la presente determinación, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, estima que a la luz del Sistema de Protección No Jurisdiccional, se desprenden evidencias suficientes para considerar violados los derechos fundamentales de “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”,

“N”, “Ñ” y “O”, específicamente sus derechos a la libre manifestación de las ideas, difusión de opiniones, de reunión, legalidad, seguridad jurídica, integridad personal y defensa, por parte del personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, a través de su actuar en el servicio público.

87. En consecuencia, respetuosamente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como los numerales 84, fracción III, inciso a), 91, 92 y 93, de su Reglamento Interno, resulta procedente emitir las siguientes:

VI.- RECOMENDACIONES:

A usted, **Lic. Cruz Pérez Cuéllar, en su carácter de Presidente Municipal de Juárez:**

PRIMERA.- Se inicie, integre y resuelva conforme a derecho, el procedimiento administrativo que corresponda, en contra de las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Juárez involucradas en los hechos de la presente queja, tomando en consideración las evidencias y razonamientos esgrimidos en la presente resolución y, en su caso, se impongan las sanciones que correspondan.

SEGUNDA.- Provea lo necesario para que se repare integralmente el daño causado a “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “N”, “Ñ” y “O”, con motivo de las violaciones a derechos humanos que han quedado precisadas, en términos de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, tomando en consideración lo que se detalla en el capítulo V de la presente resolución.

TERCERA.- En un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la aceptación de la presente resolución, en los términos de lo establecido en la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, inscriba a “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “N”, “Ñ” y “O” en el Registro Estatal

de Víctimas, para lo cual deberá enviar a esta Comisión las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Realice todas las medidas administrativas tendientes a garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos, de similar naturaleza a las analizadas, implementando en un plazo que no exceda de 90 días naturales contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente resolución, las medidas necesarias para dar cumplimiento a las medidas de no repetición, en los términos de los puntos 84.4 a 84.7 de esta Recomendación.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, primer párrafo de la ley que rige nuestra actuación, tiene el carácter de pública, y con tal carácter se divulga en la gaceta de este organismo, así como en los demás medios de difusión con los que cuenta; y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto a una conducta irregular cometida por personas servidoras públicas en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de que se inicien las investigaciones que procedan por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Las Recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, sino que, por el contrario, deben ser concebidas como instrumentos indispensables en las sociedades democráticas y en los Estados de derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y personas servidoras públicas ante la sociedad.

Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquellas y éstas, sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleven el respeto a los derechos humanos.

En todo caso, una vez recibida la Recomendación, la autoridad o persona servidora pública de que se trate, informará dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, si se acepta. Entregará en su caso, en otros 15 días adicionales, las pruebas correspondientes de que se ha cumplido, ello según lo establecido en el artículo 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La falta de respuesta dará lugar a que se interprete que la misma no fue aceptada.

En caso de que se opte por no aceptar la presente recomendación, le solicito en los términos del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44 de la multireferida Ley, que funde, motive y haga pública su negativa.

No dudando de su buena disposición para que la presente sea aceptada y cumplida.

ATENTAMENTE

NÉSTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA

PRESIDENTE

*RFAAG

C.c.p. Quejasas, para su conocimiento.

C.c.p. Lic. Jair Jesús Araiza Galarza, Secretario Técnico Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para su conocimiento y seguimiento.